

El diario Clarín frente a la política económica de Martínez de Hoz (1976-1981) durante la última dictadura militar argentina[1]

Por Marcelo Borrelli *

Resumen

Este trabajo repasa las principales conclusiones de la tesis doctoral del autor, que se propuso analizar críticamente las posiciones editoriales del diario *Clarín* (Argentina) frente a la política económica del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981), que fuera, junto con el terrorismo de Estado, uno de los principales ejes donde se apoyó el intento refundacional de la última dictadura militar (1976-1983) sobre la sociedad argentina y cuyos efectos generarán cambios regresivos a largo plazo en la economía nacional.

Palabras Clave: dictadura militar argentina, prensa argentina, diario Clarín, Martínez de Hoz, terrorismo de Estado.

1. Introducción

En este artículo presentamos las principales conclusiones de la investigación doctoral del autor (BORRELLI, 2010a) que tuvo como objetivo analizar las posiciones editoriales del diario *Clarín* de la Argentina frente a la política económica del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981) durante la presidencia *de facto* del general Jorge Rafael Videla (1976-1981) que funcionó durante la dictadura militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” (PRN) (1976-1983).

El matutino *Clarín*, uno de los de mayor circulación nacional, y que en ese momento estaba íntimamente vinculado con el ideario del desarrollismo, apoyó abiertamente los objetivos refundacionales de la nueva intervención militar de marzo de 1976 y la “lucha antisubversiva”, en relación a la persecución de guerrilleros y militantes políticos opositores que se pregonaba desde el gobierno militar. Sin embargo, a medida que Martínez de Hoz fue avanzando en su política económica centrada en la apertura económica, la valorización financiera y la desarticulación del mercado interno, *Clarín* fue destacándose como uno de sus más firmes críticos, defendiendo el interés de los actores económicos perjudicados,

denunciando sus efectos negativos y advirtiendo sobre las contradicciones entre la prédica liberal del ministro y su práctica concreta caracterizada por un recurrente intervencionismo estatal en beneficio del sector financiero y de los capitales más concentrados.

2. Referencias teóricas

Este trabajo se inscribe en su aspecto teórico dentro de la tradición de análisis crítico del discurso (VAN DIJK, 1990), entendida en amplio sentido como una sociosemiótica que se orienta a analizar las prácticas sociales de producción y reconocimiento de significados en una comunidad determinada, y “las estrategias de manipulación, legitimación, creación de consenso y otros mecanismos discursivos que influyen en el pensamiento de las personas, a través de los medios” (KORNBLIT, 2004: 118). En este caso, nos situaremos en el análisis discursivo del espacio editorial del diario *Clarín*, teniendo en cuenta sus condiciones de producción y el contrato de lectura propuesto (VERÓN, 1987) en función de su representación de las políticas del régimen militar, en particular la política económica en el periodo 1976-1981. Al entender a las condiciones de producción, como “un determinado contexto político, económico y social” (PÊCHEUX, 1978: 38) se deberá establecer las condiciones históricas y sociales en las que la enunciación fue producida (VOLOSHINOV, 1976). De allí que este artículo se proponga analizar y vincular los medios de prensa con una trama histórica, social y cultural determinada. Es sobre esta base que se comprende la posibilidad que el análisis de las publicaciones periódicas y sus posicionamientos ideológicos ofrecen para indagar el entrecruzamiento entre la historia política y la historia de las ideas.

Sobre esta perspectiva, entendemos que las publicaciones no son meros soportes de ideologías que estarían por “detrás” de ellas, sino vehículos activos destinados a la conformación de espacios sociales, la construcción de públicos, la legitimación de corrientes de opinión, la influencia concreta en las decisiones políticas y de interés público. Por eso es que entendemos al diario como un *actor político* que debe ser analizado teniendo en cuenta su capacidad de influir en la toma de decisiones colectivas y que su configuración institucional se realiza en torno al poder político y al poder económico (BORRAT, 1989).

En relación a la sección editorial, objeto específico de nuestro estudio, es comprendida como la forma de periodismo de opinión e interpretación a través de la cual se expresa el punto de vista personal de quien dirige un diario, o de la empresa a través de un equipo de editorialistas especializados en los distintos campos de la realidad (CASTELLI, 1991: 193). Es allí donde se resume la posición institucional de un medio de prensa y se sistematiza explícitamente su línea política e ideológica. Si bien la influencia de un medio de prensa puede canalizarse de diversas maneras en su superficie redaccional, el editorial es un espacio preferencial y legitimado como tal, tanto por el propio enunciador como por otros actores sociales.

3. El diario *Clarín*

Clarín lanzó su primer número al público el 28 de agosto de 1945. Su fundador fue Roberto J. Noble, un político conservador quien luego incursionó en el mundo periodístico y dirigió el diario hasta el día de su fallecimiento, el 12 de enero de 1969. Luego su esposa, Ernestina Herrera de Noble, se hizo cargo de la dirección del diario, la cual ha ejercido hasta la actualidad. Desde la década del '60 *Clarín* se posicionó en el mercado periodístico como un referente clave de la clase media de los principales centros urbanos de la Argentina, en particular de su capital, Buenos Aires. Durante el periodo 1976-1983 fue el diario con mayor tirada en la Capital Federal y, además de ser el líder indiscutido en la publicación de los avisos clasificados, consolidó una amplia influencia en la opinión pública nacional (GETINO, 1995: 91) [2]. Su influencia en la opinión pública nacional y su estructura empresarial se consolidó durante la etapa democrática iniciada a fines de 1983; en efecto, en la actualidad es el principal grupo de medios de la Argentina -por la cantidad de medios en su poder, por la alta rentabilidad comercial y por la cantidad de público que sigue a los medios del grupo- y ha extendido su participación empresarial a otros sectores productivos y financieros no directamente ligados a la comunicación.

Hacia finales de la década de 1950, y hasta inicios de la década de 1980, *Clarín* abrazó el ideario político del desarrollismo argentino encabezado por el dirigente Rogelio Frigerio y el ex presidente Arturo Frondizi (1958-1962). Hacia 1970 esta vinculación se concretará en una alianza ideológica, política y financiera con el partido que aglutinaba al pensamiento desarrollista nacional, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El vínculo se expresó en el pensamiento editorial del matutino y en la participación de hombres del desarrollismo en la redacción de *Clarín*, quienes trabajaron ejerciendo un verdadero “control ideológico” de su línea editorial.

Para *Clarín* y el desarrollismo la economía era la base de la cual dependían todos los demás niveles de la vida social argentina. Sin dar el “gran salto” del subdesarrollo hacia el desarrollo que refundaría a la sociedad argentina no podrían resolverse los acuciantes problemas nacionales. La demanda era planteada en términos drásticos, en tanto el país debía regenerarse a sí mismo a través de la “solución desarrollista”: afianzar la sustitución de importaciones, avanzar en la tecnificación del campo y en la integración agroindustrial, integrar productivamente el país, modernizar la producción energética, consolidar el capital interno y estimular la llegada del capital externo, impulsar la inversión y las “industrias de base” -siderurgia, petroquímica, papelera, etc. -afianzar la alianza de clases entre capital y trabajo para el progreso y la grandeza nacional, entre sus propuestas más relevantes (ACUÑA, 1984; NOSIGLIA, 1983).

4. Contexto histórico. La dictadura militar argentina (1976-1983): un proyecto refundacional

No cabe duda que el 24 de marzo de 1976, día del golpe militar que derrocó a la mandataria peronista María Estela (Isabel) Martínez de Perón y llevó al PRN, marcó un punto de ruptura en la historia argentina. Si bien desde hacía varias décadas la oscilación entre gobiernos civiles y militares se había convertido en una dramática normalidad en el devenir político del país, este nuevo golpe de Estado estableció un salto cualitativo en el intervencionismo castrense, con efectos devastadores para la sociedad en su conjunto. El hecho de que los militares en el poder se plantearan como objetivo una “refundación” de la República, condenando explícitamente el camino seguido por el país prácticamente desde 1930, marcaba la existencia de una nueva realidad y la necesidad de poner en práctica instrumentos antes no utilizados para la tarea de rectificar el rumbo seguido en la historia reciente [3].

Desde los gobiernos del primer peronismo (1946-1955), en la Argentina se habían sentado las bases de un modelo de integración nacional-popular que se caracterizaba por el desarrollo vinculado con la sustitución de importaciones y la expansión del mercado interno, el reconocimiento del Estado como agente y productor de cohesión social a través del gasto público social, y una tendencia hacia la homogeneidad social observable en la inclusión de la clase trabajadora como parte del desarrollo nacional y la expansión de las clases medias asalariadas [4]. Este tipo de integración fue diagnosticada por quienes tomaron el poder en 1976 como uno de los principales problemas estructurales de la sociedad argentina. Desde este punto de vista, la relación que se había establecido entre un Estado que observaban como “populista” e ineficiente y una sociedad civil con numerosas demandas y en permanente movilización, era fruto de un exacerbado conflicto social. Por ello, tanto el Estado como la sociedad debían ser “refundados” (NOVARO y PALERMO, 2003).

Luego del fracaso del régimen militar denominado como “Revolución Argentina” (1966-1973) el peronismo había regresado al poder en mayo de 1973 a través de Héctor Cámpora, protegido de Perón. En octubre de 1973 el propio Perón accedió a la presidencia, pero el 1º de julio de 1974 falleció, siendo suplantado por su esposa y en ese entonces vicepresidenta de la Nación Isabel Martínez de Perón. La nueva mandataria dio los primeros pasos en la disolución del modelo de país “nacional y popular” al propiciar la persecución de los sectores de la izquierda peronista y no peronista e impulsar una política conservadora y antipopular, que tendrá un punto de apogeo con el intento de plasmar un plan de ajuste económico conocido como “Rodrigazo” en junio de 1975 (en relación a Celestino Rodrigo, el ministro de Economía que quiso ponerlo en marcha) [5]. La debilidad de su gobierno no pudo sostener estos cambios, que fueron rechazados por los sindicatos peronistas, y se inició una

dramática pendiente de deslegitimación para su gobierno que tornó cada vez más frágil la situación política y económica.

La inestabilidad gubernamental dio pábulo a un grave proceso inflacionario, a que los sectores empresariales liberales presionaran para forzar el derrumbamiento del gobierno y los partidos políticos se desentendieran de su suerte. Mientras tanto, las bandas armadas parapoliciales de derecha -lideradas por José López Rega, hombre de confianza de Perón y de Isabel, ministro de Bienestar Social en el periodo 1973-1975 y creador de la organización paramilitar Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como Triple A- y las organizaciones político-armadas peronistas y marxistas actuaban generando un clima de inseguridad e inestabilidad política [6]. Por su parte, los militares planeaban silenciosamente una nueva intervención, sumando apoyos en sectores civiles antiperonistas. Su intención era dejar que la situación se deteriorara hasta el límite para que la ciudadanía los observara como la única salida frente a una potencial “desintegración nacional”.

Finalmente, la combinación de violencia política, crisis institucional y debacle económica fue demasiado para un gobierno tan incapaz como el que presidía la viuda de Perón. Ante la crisis, amplios sectores de la sociedad, fundamentalmente las clases medias, se mostraron dispuestos a aceptar una nueva intervención directa de los militares en la arena política, que se consumó con el golpe del 24 de marzo de 1976. Nadie (o muy pocos) conocían la profundidad de las intenciones refundacionales de quienes tomaron el poder, circunstancia que sin duda facilitó su accionar.

La Junta Militar que reunía a las tres Fuerzas Armadas, y que fue encabezada por el general Jorge Rafael Videla e integrada por el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, prontamente se abocó a la edificación de un “orden nuevo” en el que se impusiera la “vigencia de los valores de la moral cristiana” supuestamente conculcados. Uno de los instrumentos principales del proyecto refundacional del PRN fue un plan sistemático de secuestros masivos de opositores políticos en centros clandestinos de detención, posterior tortura, asesinato y desaparición en una vasta represión ilegal que produjo miles de desaparecidos [7]. La represión estuvo dirigida contra obreros, dirigentes políticos y sindicales opositores, miembros de organizaciones político-armadas y militantes políticos de diversa índole (periodistas, estudiantes, trabajadores sociales y sectores movilizados políticamente). No sólo tenía como objetivo silenciar definitivamente a los opositores y desterrar la movilización popular que había caracterizado a la política argentina, sino también lograr un férreo disciplinamiento social para implementar la reconversión material de la sociedad argentina.

Justamente, el carácter refundacional del proyecto se relacionaba con la puesta en marcha del plan económico impulsado por el ministro de Economía Martínez de Hoz, que tenía un objetivo preciso: revertir el proceso por el cual la Argentina se había embarcado en una industrialización que los sectores liberales juzgaban como “artificial”, cuyo resultado había sido el crecimiento “distorsionado” de un sector productivo ineficiente y el surgimiento de una

clase obrera que se había constituido en factor perturbador para la acumulación de los sectores dominantes. Era imprescindible entonces el retorno a una economía abierta en la que el papel del Estado disminuyera drásticamente en importancia y el mercado recuperara su rol como asignador de recursos. Este análisis iba acompañado de una hipervaloración de las cuestiones monetarias y financieras, que tuvo como consecuencia la transformación del sector financiero en el principal actor del nuevo escenario económico, siendo los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros los principales beneficiarios de los cambios introducidos (SCHVARZER, 1986).

Pese a que el ministro se mantuvo durante cinco años en el poder junto al presidente Videla, su orientación económica generó diversas tensiones en el elenco militar entre aquellos sectores “estadistas” e “industrialistas” que se oponían al objetivo de reducir las capacidades económicas del Estado y de disciplinamiento al sector industrial.

De manera que la realidad política y económica de la Nación, por lo menos hasta principios de 1981, momento de la salida del poder de Videla y Martínez de Hoz, estuvo determinada por dos factores: las dimensiones del accionar represivo y los avatares de la gestión económica.

No obstante, había otros factores que también tuvieron máxima incidencia sobre la evolución de la situación política. En el interior del gobierno rápidamente se manifestaron tendencias contrapuestas: por una parte, Videla y el general Roberto Viola representaron para muchos analistas y actores sociales al sector “moderado” del Ejército dispuesto a discutir el futuro político del país con representantes de los partidos cuya actividad había sido suspendida tras el golpe del 24 de marzo. No había un proyecto único en este sentido, y los existentes no carecían de ambigüedades, pero al menos tenían en claro la necesidad de algún tipo de “salida institucional”.

Frente a los “moderados” se alzaba dentro del Ejército un sector mucho más intransigente, catalogado como “duro”. Este sector pensaba en un largo período de gobierno militar destinado a restablecer la salud de la “Nación enferma”. Se trataba además de los militares más comprometidos directamente con las operaciones de represión ilegal (aunque tanto los “moderados” como los “duros” actuaron en forma cohesionada en torno al plan represivo).

La tercera tendencia en pugna estaba relacionada con el proyecto político del almirante Massera. El jefe de la Marina, quien formó parte de la Junta Militar desde marzo de 1976 hasta septiembre de 1978, pensaba que iba a poder ubicar a su arma como el fiel de la balanza entre las facciones del Ejército, y que a su vez sacaría provecho de esas diferencias para su anhelo personal de figuración política. Para su estrategia de poder contó con el manejo de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención que funcionó en la Capital Federal y por el que pasaron cerca de 5.000 detenidos-desaparecidos que en su mayoría fueron asesinados.

5. *Clarín* y el quinquenio Videla-Martínez de Hoz (1976-1981). Balance y periodización de su posición editorial.

5.1. Un consenso expectante: primeras evaluaciones sobre el gobierno militar y el nuevo escenario económico

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 por el cual las Fuerzas Armadas argentinas tomaron el poder fue recibido con un *consenso expectante* por parte del matutino en función de su aprobación a la acción militar -aunque sin expresar un apoyo fervoroso- y a la coincidencia discursiva con los militares en torno al ímpetu refundacional con que se presentaron ante la sociedad argentina (*Clarín*, 25/3/1976). Ese consenso se inscribía en uno más amplio que la ciudadanía había otorgado a la acción, luego de los últimos meses en los que el gobierno de Isabel Martínez de Perón se había mostrado negligente para resolver los problemas políticos y económicos de una sociedad cada vez más atemorizada por su futuro. Sin embargo, la adhesión activa de *Clarín* al PRN estaría condicionada a la implementación de lo que hemos denominado como la “solución desarrollista”. Por eso, dos días después del golpe de estado, advertía que se estaba frente a “la hora del acierto” pero, como los márgenes de error habían quedado reducidos por la agudización de la crisis, se hacía indispensable “no equivocarse esta vez el diagnóstico y proceder a erradicar, de una vez por todas, las trabas que afectan nuestro crecimiento y los vicios que minan la voluntad de avance de la Nación” (*Clarín*, 26/3/1976). De allí que, aunque no lo dijera explícitamente -ni por supuesto con tales palabras-, su opción desde un principio fue que el régimen militar se transformara en una *dictadura desarrollista*. Es decir, que encarara en forma definitiva la “lucha antisubversiva” contra las organizaciones guerrilleras y los sectores políticos más combativos, que reordenara el “caos” político, económico y social con que había terminado el gobierno de Isabel y que impusiera una amplia disciplina social en el marco de la recomposición de la autoridad pública, pero que encauzara estas acciones “reorganizadoras” por medio de la puesta en marcha de un programa de gobierno desarrollista. Sin el cual, además, la “lucha antisubversiva” solo sería encarada en su faceta militar y la refundación material anhelada volvería a truncarse como en anteriores experiencias militares (BORRELLI, 2010b) [8].

La elección del equipo económico por parte de la dictadura, con la jefatura del ministro de Economía José Martínez de Hoz -hombre de familia aristocrática y terrateniente,

ligado a los centros financieros mundiales, de ideas liberales y que ya había ejercido por un breve tiempo ese cargo en 1963-, fue un evidente signo desalentador para la perspectiva ideológica del matutino y del desarrollismo, que fue expuesto tempranamente y sin titubeos por el propio MID (MID, 1981: 10-2). Pero esto no fue considerado un obstáculo para que el diario rechazara abiertamente cualquier esbozo de retorno al “electoralismo” -término despectivo con que se señalaba la práctica eleccionaria pero vacía de contenido, debido a la escasa representatividad de los partidos políticos-, confiando en que las Fuerzas Armadas honrarían el sesgo nacionalista e industrialista que las caracterizaba y pondrían en marcha el “cambio de estructuras”, frase con la que el desarrollismo resumía la transformación radical que necesitaba la economía argentina.

De todas maneras, el diario no se enroló con los sectores más “duros” del régimen, ni comulgó con una cerrazón *sine die* de éste hacia dentro de sus propias filas o con las intenciones corporativistas que latían en su interior. Su apuesta era por una futura convergencia cívico-militar que, una vez concretado el “cambio de estructuras” por la *dictadura desarrollista*, hiciera desembocar a la “revolución” -así denominaba *Clarín* a la dictadura en los primeros meses de 1976- en la democracia renacida, que contaría con unas fuerzas civiles revitalizadas y el reaseguro de la intervención institucionalizada de las Fuerzas Armadas para desterrar definitivamente el “movimiento pendular” entre gobiernos civiles débiles y gobiernos militares que fracasaban rápidamente, fórmula que había caracterizado la inestable vida institucional de la Argentina en los años previos.

Luego de anunciar sus primeras medidas el 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz privilegió un programa clásico de “estabilización”, con fuerte perjuicio para los asalariados, pero sin esbozar manifiestamente el programa de políticas aperturistas y de valorización financiera que sería la impronta crucial de su programa tiempo después. Los anuncios, si bien se inscribían dentro del diagnóstico y de la propuesta liberal, todavía realizaban algunas enunciaciones generales que podían ser consideradas como correctas desde el ideario desarrollista, como la promoción de las industrias básicas o la frase ministerial, muy recordada posteriormente por el diario por su contradicción con las acciones concretas de Martínez de Hoz, sobre que se implantaría una economía de “producción” en reemplazo de una economía de “especulación” (*Clarín*, 3/4/1976, pp. 2-3) [9].

Pese a la desconfianza que generaba el nuevo ministro para los hombres del desarrollismo, durante los primeros meses de la gestión económica la evaluación del diario tendió a destacar positivamente la descompresión de la situación crítica anterior y el “ordenamiento” que se estaba realizando en la macroeconomía nacional, ya que el gobierno de Isabel Perón había finalizado con altísimos índices inflacionarios, déficit público, inminencia de cesación de pagos, pérdida de reservas del Banco Central, problemas en la balanza de pagos, falta de inversión productiva, desabastecimiento, crecimiento del mercado negro y la especulación. Entendemos que esta primera evaluación *complaciente* del diario debe interpretarse en el contexto más amplio del consenso general con que fue recibido el golpe de Estado por la opinión pública, y luego de la descompresión que generó la aplicación de las

primeras medidas “correctivas” -socioeconómicas y políticas- del régimen. Aunque también, en simultáneo, existió cierta coincidencia del matutino con algunas medidas puntuales y conceptos vertidos por el ministro en los primeros meses de 1976, que se expresó en el apoyo editorial y de lo que puede desprenderse también algunas tendencias que unían a ambos idearios. Principalmente, el matutino se mostró del todo de acuerdo con los objetivos de “racionalización” estatal pregonados discursivamente por Martínez de Hoz -reducción del gasto público, achicamiento de la planta de empleados públicos, mejor asignación de los recursos, privatización de empresas estatales-. Ya en el segundo editorial que analizó temas específicamente económicos luego del 24 de marzo, *Clarín* demandó el crucial “redimensionamiento del Estado”, pues era uno de los ejes del proceso de “rehabilitación” estatal que habían puesto en marcha los militares (*Clarín*, 30/3/1976). Y días después consideró que el “redimensionamiento” había sido adecuadamente encarado por el gobierno, pues era interpretado como condición necesaria para salir de la crisis y para alcanzar las “metas de la liberación nacional” (*Clarín*, 4/4/1976). El aval a este criterio se explicitaría unos meses más tarde, cuando aseguraba: “En cuanto a las empresas estatales, existe un solo camino: privatizar a todas las que estén en condiciones de serlo. Y racionalizar las demás, por supuesto” (*Clarín*, 24/6/1976). En esta línea, también fue considerada adecuada la idea de liberar a las fuerzas del mercado de la intervención estatal en tanto ésta se volviera nociva para el “natural” desarrollo del empresariado, aunque bajo una perspectiva diferente a la oficial en torno a cómo debía actuar el Estado y a qué sectores debía beneficiar su intervención, ya que para el desarrollismo debía ser el garante del desarrollo del mercado interno y de los actores vinculados a la producción: empresarios y trabajadores. Por otra parte, desde ambas concepciones se desprendía un acuerdo tácito sobre que el capitalismo era el mejor sistema para estructurar la vida socioeconómica del país; y, por último, coincidían tanto en el dogmatismo, la intransigencia y la orientación autoritaria con que defendían sus idearios, como en la apuesta por una gestión tecnocrática y eficientista de los recursos productivos, particularmente en la gestión estatal, aunque extendida también hacia una interpretación más amplia de las relaciones políticas y sociales.

De todas maneras, esta actitud complaciente se irá diluyendo paulatinamente. A partir de la crítica severa que el MID hizo públicamente a inicios de septiembre de 1976 sobre la situación económica (MID, 1981: 20-3), *Clarín* comenzó a secundar al desarrollismo en su distanciamiento en torno al derrotero económico del gobierno. Hasta ese momento las objeciones no eran generales sino más focalizadas en ciertos aspectos: se había rechazado la posición de quienes querían volver al “viejo esquema agroimportador” pregonando la “apertura” desde la teoría de las “ventajas comparativas” (*Clarín*, 13/5/1976), como también se habían subrayado las primeras contradicciones entre los objetivos declamados por la Conducción Económica (CE) y su práctica concreta. En particular, este señalamiento de contradicciones estuvo centrado en la dilación para poner en marcha el “redimensionamiento” estatal o la privatización de empresas públicas, la continuidad del déficit fiscal, y en destacar las medidas ligadas al “intervencionismo” y al “dirigismo” que se contradecían con la “filosofía económica” liberal sostenida desde la cúpula de la autoridad económica (*Clarín*, 19/10/1976;

14/11/1976; 19/11/1976). También durante los primeros meses los editoriales alertaron con insistencia sobre el perjuicio que estaba sufriendo el salario real, aunque sin que esto supusiera un apoyo a la germinal oposición de algunos grupos sindicales, que fue rechazada aduciendo su falta de legitimidad por su responsabilidad en el reciente “caos” por el que había atravesado el país.

Pese a las advertencias cada vez más pronunciadas sobre las imprecisiones de la política económica, el diario no eligió la confrontación abierta. La moderación puede atribuirse a variables convergentes: al contexto de inicio del nuevo gobierno, a la prudencia de la empresa periodística por mantener buenas relaciones con el régimen en función de sus intereses comerciales [10], a que los objetivos de Martínez de Hoz aún no estaban abiertamente expuestos, y a que ciertos sucesos emanados del propio poder militar -como la creación del Ministerio de Planeamiento en 1977 o el rechazo que generaba Martínez de Hoz en la Marina o en sectores del Ejército (BORRELLI, 2008)- alimentaban la expectativa sobre que un sector de las Fuerzas Armadas lograra imponerse en la interna castrense e impulsar la tesis más cara al credo desarrollista. En efecto, aunque sin inmiscuirse en un tema sensible como era la interna militar, en un principio el diario pareció apostar implícitamente por una opción de este tipo: un cambio desde el mismo seno del poder militar, en tanto una fracción “neodesarrollista” lograra torcer el rumbo de la “revolución” y reconducir a las Fuerzas Armadas por su senda “nacional”.

Vale destacar que la distancia del matutino hacia las medidas económicas se realizó en simultáneo con la ponderación positiva del proceso “revolucionario” abierto por el gobierno militar, el rol de las Fuerzas Armadas en la “lucha antisubversiva” o la figura del presidente Jorge Videla y su “extraordinaria claridad pedagógica” (*Clarín*, 17/12/1976). Así, al cumplirse un año del golpe de Estado, *Clarín* confirmaba su adhesión al “Proceso” y su demanda de una mayor profundización de la “revolución” iniciada en 1976 (*Clarín*, 24/3/1977). En principio, destacaba que el arribo al poder de las Fuerzas Armadas había impuesto el “orden”, cubierto el “vacío de poder” y aventado así los factores de desintegración. El golpe de Estado era presentado como un acto de responsabilidad de las Fuerzas Armadas hacia el país, en tanto eran garantes últimas de la “sobrevivencia del Estado-Nación” y no se habían intimidado frente al “vacío de poder” que “obligaba a actuar” (*Clarín*, 27/3/1977). Un año después, la propuesta de las Fuerzas Armadas tenía “total vigencia” y la clave continuaba siendo el avance en los objetivos del “Proceso”: “Su tácitamente aceptado desafío consiste en hacer la revolución. No volver atrás”, sentenciaba. Por otra parte, destacaba que la “subversión” estaba “derrotada y dispersa”, y que el triunfo del “orden” era amplio aunque se había logrado a un “muy alto costo social”. Pero la victoria definitiva solo se alcanzaría al ofrecer las “respuestas materiales” que consolidarían “la causa de la libertad y de la democracia”. Justamente, la economía continuaba soportando los desafíos más “riesgosos”, como lo venía advirtiendo *Clarín* (*Clarín*, 24/3/1977).

Tempranamente, objeción económica junto con apoyo político se transformarán en uno de los pilares de la política editorial del matutino.

5.2. *Un distanciamiento que se profundiza: la Reforma Financiera de 1977 y sus consecuencias*

Habr  que esperar entonces al segundo semestre de 1977, luego de sancionarse la Reforma Financiera de junio de 1977, para que las objeciones del diario apuntaran de manera m s integral al conjunto de medidas que estaba impulsando la CE, a su filosof a y objetivos, y a la figura de Mart nez de Hoz y la de otros pol micos integrantes del Ministerio de Econom a. B sicamente, la Reforma arbitraba la creaci n de un mercado financiero de corto plazo libre de regulaciones, en el marco de la apertura total de la econom a (SCHVARZER, 1986: 61-2). Su funcionamiento era una “ruptura completa” con respecto al pasado (CANITROT, 1980: 23), ya que hasta ese momento eran las pol ticas estatales las principales orientadoras del mercado de capitales y el Estado era el principal reasignador de los recursos hacia la industria.

Junto con la Reforma se abandon  la pol tica monetaria activa iniciada en 1977 y se puso en pr ctica una pol tica antiinflacionaria que incluy  una pol tica monetaria ortodoxa mucho m s restrictiva que estimular a el alza de la tasa de inter s y devendr a en un proceso recesivo que se extender  hasta abril de 1978, cuando se le puso fin. Durante ese lapso la tasa de inter s subi  y el producto industrial cay  el 25% (CANITROT, 1983: 38). De esta manera, al adoptar una pol tica que reduc a la demanda global, la CE trunc  una etapa de auge econ mico que, a pesar de la inflaci n, podr a haber dotado al r gimen de mayor respaldo social (NOVARO y PALERMO, 2003: 224) (t ngase en cuenta que pese a la recesi n del segundo semestre, el PBI creci  un 6,39% para todo el a o 1977; FERRERES: 2005: 229). Perodo que adem s, en condiciones de salarios controlados, hubiera redituado muy altos beneficios a los sectores empresarios que constitu an la base social de sustentaci n pol tica del r gimen (CANITROT, 1980b: 49). Era una muestra di fana de que el r gimen y la CE no vacilaban en adoptar las medidas que fueran necesarias en pos del objetivo de liberalizar el mercado de capitales y crear las condiciones para que funcione sin restricciones, como instrumento apto y leg timo para el disciplinamiento social y asignador  ptimo de recursos e ingresos (CANITROT, 1980b: 49-50).

Mientras que a fines de 1977 e inicios de 1978 el Estado impulsaba decididamente al alza a la tasas de inter s para incentivar la entrada de capitales, las severas impugnaciones del matutino se dirigieron al n cleo central de los cambios que se estaban operando y a las falencias estructurales de la econom a que no se resolv an. As , se advirti  sobre el perjuicio que se estaba ocasionando a la industria nacional por el achicamiento del mercado interno, por el peso del costo financiero y la presi n fiscal, las rebajas arancelarias a productos importados y la ausencia de incentivos para exportar (*Clar n*, 13/7/1977; 26/7/1977; 2/8/1977; 20/8/1977; 6/9/1977). En funci n de la preocupaci n por la reducci n del mercado interno, se

mantuvo la inquietud sobre la política salarial y la situación de los asalariados (*Clarín*, 2/5/1977; 10/6/1977; 2/10/1977). En simultáneo, se continuó insistiendo sobre los males del “estatismo”, la persistencia del déficit de las cuentas públicas, la expansión del gasto público y la inacción para adoptar la “racionalización administrativa” (*Clarín*, 15/7/1977; 16/8/1977; 19/10/1977; 8/11/1977; 29/11/1977). También la “recurrente inflación” fue tema excluyente de la editorialización, ya no solo adjudicada al “desborde” del gasto público, el déficit y la emisión monetaria, sino también al “alto costo del dinero” que era trasladado a los precios constituyendo “una fuente autónoma de inflación” (*Clarín*, 12/8/1977; 30/9/1977; 13/10/1977) [11]. A todo ello se sumó la fuerte advertencia sobre el avance del endeudamiento público externo, sobre el que se manifestó abiertamente en contra porque esos recursos eran destinados a cubrir el déficit presupuestario y porque se estaba gestando una “pesada carga a futuro” (*Clarín*, 1/11/1977; 6/12/1977; 30/12/1977) [12].

En definitiva, a partir de mediados de 1977, en una interpretación que observa en perspectiva todo el periodo de análisis, *Clarín* irá abandonando el *consenso expectante* con que había recibido al gobierno militar frente al evidente rumbo que estaba tomando la política económica y exhibirá un estilo editorial más *combativo* [13], aunque ceñido principalmente al ámbito económico, que dejará paso a la *expectativa crítica*, por la cual el diario se mantuvo a la espera de cambios pero ahondando su veta impugnadora; al menos hasta inicios de 1979, cuando aún parecía mantenerse una esperanza de un eventual “cambio de rumbo” en la política económica.

Hacia 1978 el sesgo recesivo de la economía será advertido en reiteradas oportunidades por el matutino con un estilo marcadamente *admonitorio* [14], advirtiendo que se estaba frente “a una crisis económica que, cualquiera sea el rótulo que se le asigne, es más grave que las precedentes” (*Clarín*, 2/2/1978). No era el único que levantaba la voz contra el ministro. También dentro de las propias Fuerzas Armadas surgían resistencias al manejo económico que estaba llevando la economía a la recesión, así como de parte de los empresarios, los sindicalistas y los dirigentes políticos. En medio del crecimiento de las críticas provenientes de diferentes sectores, Martínez de Hoz dio por finalizada la etapa contractiva en abril de 1978 rindiéndose a la presión ejercida por las Fuerzas Armadas, que temían que la conjugación de altas tasas de interés con descenso del PBI se reflejara en un efecto negativo sobre el nivel de empleo. El 11 de mayo el ministro anunció las nuevas medidas contra la inflación, que el matutino interpretaba -en la nota que informaba sobre el anuncio- como un “ajuste” de su plan (*Clarín*, 12/5/1978, p. 13). El anuncio incluía la liberación total del tipo de cambio, que dará inicio a la sobrevaluación del peso ya que la CE irá ajustando la tasa de cambio a un ritmo inferior al del alza de los precios. Ese retraso cambiario, que para *Clarín* generaba una fortaleza “artificial” de la moneda nacional frente al dólar, contradecía el discurso inicial de Martínez de Hoz del 2 de abril, lo cual fue denunciado con especial énfasis en varios editoriales que resaltaron la discordancia entre el “programa” y los “hechos” [15].

Durante 1978, a los índices preocupantes que estaba arrojando la economía en términos de inflación y recesión, se sumó la incertidumbre sobre el rumbo del plan económico

y la continuidad del ministro, desconcierto atizado también por el potencial conflicto bélico con Chile por el canal de Beagle que se mantuvo con intermitencia en la agenda pública durante el año. Todo ello, en medio de la generalización de opiniones críticas sobre la realidad económica que abarcaba una multiplicidad de actores que conformaron un verdadero “frente informal”: algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los empresarios industriales, un sector del agro, los comerciantes ligados al mercado interno, los sindicalistas, los dirigentes políticos, la prensa, los “liberales tradicionales” [16] y amplias capas de la ciudadanía. En esta etapa, donde la política económica todavía no parecía tomar un sendero definitivo, *Clarín* continuó profundizando su veta crítica. Y, a la vez que cumplía eficazmente con su rol de “juez” desarrollista, también se posicionará como un virtual “abogado” defensor de los intereses del empresariado nacional golpeado por las medidas de la CE, en una actitud que atravesó todo el periodo de estudio.

5.3. Combatiendo a Martínez de Hoz para salvar a las Fuerzas Armadas: Clarín frente a la adopción del enfoque monetario de la balanza de pagos (1979-1981)

Si quedaba alguna expectativa sobre un “cambio de rumbo”, ésta desaparecerá por completo a partir del año 1979, cuando el Palacio de Hacienda jugará a fondo su capital político con la adopción del *enfoque monetario de la balanza de pagos* al ahondar la apertura hacia los capitales externos, la apertura comercial a través de las reducciones arancelarias y la sobrevaluación del peso a través de la denominada “tablita” cambiaria [17]. El nuevo paso del Palacio de Hacienda instaló a debate público el “programa antiinflacionario” -así habían sido presentadas las nuevas medidas-, por lo cual se desplegó una verdadera disputa por el sentido de las transformaciones en curso, donde el matutino se ubicó como un púgil incisivo en pos de demostrar la regresión de las medidas implementadas y erosionar el cada vez más reducido margen de maniobra del equipo económico. Así, durante todo el año 1979 refrendará su impugnación total de la política económica y la denuncia de la grave afectación que estaba sufriendo la economía nacional, que pese a un relativo mejoramiento en los términos del PBI y a la aparente tranquilidad macroeconómica que otorgaba la entrada de capitales especulativos por las medidas implementadas, continuaba signada por una alta inflación, por un magro coeficiente para el salario real, y por los problemas de los sectores industriales afectados por las rebajas arancelarias y la sobrevaluación del peso; situaciones que se daban en el nuevo escenario que significaba la valorización financiera en un mercado atravesado por la volatilidad, el cortoplacismo y el crecimiento del endeudamiento público y privado con el exterior que en gran parte iba a la especulación financiera.

Como lo hará en varios momentos, el contra ejemplo que citaba como la economía que estaba tomando el camino correcto era Brasil. La experiencia brasileña y su proteccionismo industrial fueron elogiados insistentemente, y los sólidos números de su

economía ponían de relieve comparativamente el rezago económico que comenzaba a tener Argentina frente a su vecino (*Clarín*, 27/1/1979; 10/5/1979; 30/5/1979; 10/6/1979; 24/6/1979).

En este nuevo contexto el estilo *apologético* [18] del matutino con el que había caracterizado a la dictadura en sus primeros tiempos pasará a un segundo plano para dejar lugar al estilo *combatiivo* y *admonitorio* en torno a la cuestión económica (el tono *apologético* quedará reducido a las expresiones de celebración por la “paz ganada” en la “lucha antisubversiva” y para revalidar el crédito que las Fuerzas Armadas aún tenían como actores políticos para implementar los cambios prometidos o para forjar una salida institucional del “Proceso” con ellas como tutoras de la nueva democracia). También en este periodo se enfatizará el estilo altamente *predictivo* [19] que alertará sobre la crisis que se estaba gestando con la manipulación cambiaria y arancelaria, la entrada de capitales “golondrinas” y el endeudamiento de las empresas.

Al iniciarse el decisivo año 1980, y ante la proximidad de la apertura del “diálogo político” –saludado abiertamente por el matutino- [20], *Clarín* aprovechó para colocar nuevamente bajo discusión a la orientación económica, pero en este caso a través de la contundente expresión de la directora del matutino en una inusual serie de tres editoriales (*Clarín*, 6,7 y 8/4/1980). Sin embargo, pese a su explícita objeción al rumbo económico, también allí era descartado el retorno apresurado al “electoralismo”, término despectivo con el que, como se ha indicado, el desarrollismo mencionaba a la práctica electoral que consagraba en el poder a una dirigencia partidaria perimida.

Pero la crisis financiera que estalló entre marzo y abril se constituirá en un punto sin retorno para la estrategia oficial y, con ello, para la economía nacional. A partir del cierre del Banco de Intercambio Regional el 28 de marzo de 1980, una de las entidades que más depósitos había captado en los últimos meses por sus altos rendimientos, y de otras entidades financieras, se quebró la confianza en el sistema financiero y se desataron violentamente todas las tensiones provocadas por las medidas impulsadas por la CE en los últimos años.

La nueva dinámica impuesta por la realidad económica se reflejó de manera contundente en la evaluación editorial del matutino, que durante el segundo semestre fue hegemonizada por la denuncia severa sobre el deterioro de la situación económica. Esto ocurría, además, en el contexto más amplio de un cambio en la opinión pública sobre la evaluación del gobierno militar, con claros indicios de una menor tolerancia hacia sus contradicciones y su impronta autoritaria en todos los ámbitos, que era parte del proceso de pérdida de capital político que venía sufriendo desde fines de 1978.

Frente a la nueva realidad que impuso la crisis, y ante la perspectiva de que la gestión Martínez de Hoz se encontraba cercana a su finalización, en este periodo puede rastrearse lo que denominamos como una *editorialización de la resignación*, que abandonó definitivamente la expectativa para que se concrete la “solución desarrollista” -manteniendo sin embargo la

agenda de temas que preocupaban al ideario- a la espera que la sucesión gubernamental a realizarse en marzo de 1981 diera nuevas esperanzas para el ya frustrado “cambio de rumbo”. Paralelamente, durante esta etapa *Clarín* se permitió marcar un límite a la legitimidad de la victoria en la “lucha antisubversiva” que las Fuerzas Armadas habían utilizado para gobernar, y destacar implícitamente su rol como activas impulsoras de una política económica que había excedido las atribuciones que se habían arrogado en el inicio del “Proceso” y que las estaba enfrentando con los argentinos “comunes”, “no extremistas”, que querían producir y trabajar “normalmente” (*Clarín*, 18/9/1980).

Instalada la disyuntiva entre “cambio o continuidad” de la política económica -ya que la presidencia de Videla, principal sustento del ministro, finalizaba a fines de marzo de 1981- *Clarín*, como era predecible, apostó por la primera de estas opciones, a la espera que el nuevo presidente militar elegido por las FF.AA en octubre de 1980, el general Roberto Viola, pusiera en acto sus coqueteos “productivistas” y diera un giro al “Proceso” para salvarlo; y con él, preservara a las Fuerzas Armadas de la política económica “antinacional” que las había alienado.

Finalmente, en los ajetreados días de inicios de 1981, con el telón de fondo de las “corridas” hacia el dólar, la reducción drástica de reservas en dólares del Banco Central, la suba exorbitante de las tasas de interés pasivas, la fuga de capitales y el fin de la gestión Martínez de Hoz, *Clarín* explicitó lo que había sugerido en varios editoriales, pero también lo que había eludido destacar en otros: que el plan mismo del ministro era quebrar las bases del sistema productivo argentino con eje en la industria nacional. En sus palabras, si se partía de que el programa monetarista subordinaba toda la economía a la evolución de la variable “precios”, escindiéndose de este modo de los intereses concretos de los sectores productivos, podía afirmarse que “la renuencia al cambio, la intransigencia en las medidas que a todas luces se han mostrado como una traba al avance de la producción, se debe a que el estado de cosas actual es conscientemente provocado o, cuando menos, aquiescentemente tolerado, como parte de una estrategia global” (*Clarín*, 23/2/1981).

Aún llegado a ese extremo el matutino insistió en la distinción entre Fuerzas Armadas y CE; mientras las primeras eran incluidas en el continente de lo “nacional”, la CE y las “corporaciones transnacionales” eran ubicadas en el “antinacional”, que en conjunto habían logrado avasallar a las primeras. Las palabras finales de la directora de *Clarín*, en el editorial “Asumir la realidad como fundamento de la esperanza” (*Clarín*, 29/3/1981, p. 1), aunque revisaba en términos graves la “crisis” dejada por el equipo económico saliente y casi no recurría al estilo *apologético* para referirse al régimen, revalidaba esta postura al continuar apostando para que las Fuerzas Armadas cambiaran la orientación económica manteniendo la continuidad política:

Las Fuerzas Armadas, que tienen en su haber el triunfo contra la subversión al costo de enormes sacrificios, están en condiciones de realizar esa convocatoria [*al pueblo, para llevar adelante las medidas que resuelvan la situación económica*]. Se les presenta una alternativa en que la crisis económica puede llegar a minar los logros que han alcanzado en ese terreno y en que superar esa crisis puede dar la consolidación definitiva de la victoria y la realización de todos los objetivos que se trazaron al asumir el poder. (...)

Por eso, mostrar la realidad en su exacta medida, tal como hemos intentado en esta columna, es un aporte al éxito del proceso militar y al éxito del flamante gobierno que preside el general Viola. Ver la realidad y callarla es trabajar para el pasado, decirla es comprometerse con el futuro. Hoy, como nunca, la realidad es el fundamento de la esperanza (*Clarín*, 29/3/1981, p. 1).

Es decir, *Clarín* seguía apostando, como desde marzo de 1976, por una *dictadura desarrollista*.

Reflexiones finales

En forma de conclusión quisiéramos profundizar la reflexión sobre lo que constituyó una posición editorial central de *Clarín* que atravesó todo el periodo 1976-1981: que junto al paulatino distanciamiento en el ámbito de la política económica el diario conservó su apoyo en términos políticos al “Proceso”. Tal posicionamiento tuvo algunos réditos simbólicos y otros materiales para el diario. En primer término, la subordinación general que sufrió el discurso político a manos del económico durante todo estos años -que fue uno de los campos más debatidos públicamente- legitimó la visión que el matutino sostuvo desde un principio sobre la realidad nacional, en tanto las preocupaciones centrales del país parecían concentrarse finalmente en la economía. En segundo término, esta escisión le permitía al diario un doble juego: no colisionar con el poder político militar y a la vez exhibirse ante sus lectores como un diario con relativos márgenes de independencia crítica. Al resguardar a los militares de las objeciones desarrollistas -sumado al apoyo político que se le brindaba-, la empresa periodística demostraba su buena voluntad hacia quienes manejaban discrecionalmente el Estado, lo cual también le permitió evidentemente acceder a negocios como el de Papel Prensa. Pero simultáneamente, al erigirse como “juez” y “censor” de una política económica que afectaba a la ciudadanía en general, demostraba un margen de autonomía con respecto al poder militar,

reafirmaba su coherencia doctrinaria al revalidar los principios desarrollistas, y “compensaba” la funcionalidad con el poder militar que se desprendía de otras decisiones editoriales -como la autocensura en torno a la represión clandestina-.

Clarín equilibraba así los términos del apoyo y la objeción, aunque dejando abiertos ambos caminos. De modificarse la orientación económica y revitalizarse las expectativas de la población en torno a las promesas inaugurales del “Proceso”, podía profundizar su apoyo y disponerse a “dejar atrás” el pasado de errores, principalmente en el área económica. De mantenerse la intransigencia del régimen, o si a éste le fuera imposible lidiar con los problemas generados por su propia política, y terminara finalmente en una nueva frustración enajenándose el favor de la ciudadanía, ampliaría su crítica desde el ámbito económico hacia otros de tinte político -como tenuemente ya lo estaba haciendo en 1980- y se posicionaría como un defensor y representante de los sectores afectados y de las clases medias urbanas cansadas de la censura y el autoritarismo o del más general “interés nacional” lesionado por la dictadura con su práctica económica y, ahora sí, política. Es decir, como un sagaz *actor político*, el diario hacia 1981 irá dejando un margen de acción para acomodarse ante los eventuales cambios que surgieran del triunfo o del -ya más probable- fracaso de la “revolución” nacida el 24 de marzo, de manera de preservar sus propios intereses como medio periodístico y empresa comercial.

NOTAS

[1] Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el *XI Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación - ALAIC 2012 -*, Universidad de la República, Ciencias de la Comunicación, Montevideo, del 9 al 11 de mayo.

[2] Su promedio de venta diaria para 1976 fue de 325 mil ejemplares, mientras que en 1981 (hasta noviembre) ascendió a 536.073 (DE RÚSSOVICH y LACROIX, 1986: 20).

[3] El 6 de septiembre de 1930 el general José Uriburu encabezó el primer golpe de Estado militar contra un gobierno electo popularmente, en esa ocasión presidido por el radical Hipólito Yrigoyen. Desde tiempo antes los militares componían una fuerza política, pero a partir de 1930 fue evidente su competencia por el poder en la vida pública. Posteriormente, la alternancia de gobiernos civiles y militares fue enhebrando una cultura política autoritaria que transformó la intervención castrense como un acontecimiento legítimo de la política nacional (los militares encabezaron golpes de Estado nuevamente en 1943, 1955, 1962 y 1966).

[4] Juan Domingo Perón accedió a la presidencia de la Nación por el voto popular para el periodo 1946-1952; luego fue reelecto en 1951 para el periodo 1952-1958 pero fue derrocado por un golpe de Estado militar en septiembre de 1955. Durante su presidencia los sectores populares y trabajadores incrementaron su participación en el ingreso nacional, recibiendo diversos beneficios sociales. Su estilo de gobierno se caracterizó por la utilización de procedimientos autoritarios, sumado a que los cambios sociales prohiados por sus políticas fueron incrementando la polarización social entre las clases altas y las medias-bajas.

[5] Las medidas de su plan incluían una gran devaluación de la moneda nacional, aumentos de tarifas y combustibles que sobrepasaban ampliamente los aumentos salariales y una política restrictiva del gasto público.

[6] Durante 1960 el fenómeno insurreccional asomó a la vida política argentina y fue hacia finales de esa década e inicios de la del '70 que se constituyeron las principales organizaciones político-armadas. Hacia 1976 las organizaciones más importantes eran Montoneros -surgido en 1969, de inspiración católica y nacionalista que rápidamente se incluyó dentro del peronismo representando la "izquierda" del movimiento- y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), surgido en 1970 del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

[7] La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada por el presidente Raúl Alfonsín en los primeros años de la democracia recuperada en 1983 para investigar el destino de los desaparecidos, concluyó que éstos eran cerca de 9.000 (CONADEP, 1997). Por su parte, las organizaciones de derechos humanos han recabado denuncias que han llevado a sostener que son 30.000 (cifra que se masificó como legítima en la población argentina).

[8] Para *Clarín* la erradicación total de la "subversión" llegaría cuando se resolviesen los problemas económicos de fondo que eran, según su visión, los que en última instancia generaban las condiciones para que crecieran ese tipo de demandas radicalizadas. Por eso, debía enfrentársela en términos "globales", no solo militares, a través de las "verdaderas armas de la paz" que eran las del desarrollo económico (*Clarín*, 9/10/1975).

[9] En sus trazos más relevantes el plan del 2 de abril anunciaba la reformulación del rol del Estado al consagrar el principio de "subsidiariedad" -que incluía la privatización de empresas en manos del Estado- y se proponía llevar a cabo el "redimensionamiento" de las estructuras

estatales para reducir el “gasto improductivo” y el déficit fiscal, que según el ministro eran los principales responsables de la emisión monetaria y la consecuente inflación. Pero anticipaba que ante la gravedad de las finanzas públicas recibidas no sería posible esperar una reversión absoluta en los gastos estatales. También se mencionaba el objetivo de la “libre competencia” y el aprovechamiento de las “ventajas comparativas” del país.

[10] En particular, entre fines de 1976 y principios de 1977 se concretó la participación de *Clarín* y los diarios *La Nación* y *La Razón* -en asociación y con el aval del Estado Nacional manejado por los militares- en la empresa productora de papel para diarios Papel Prensa S.A, en un emprendimiento fundamental para el crecimiento empresarial de *Clarín* y cuya concreción se encuentra desde 2010 bajo investigación de la Justicia argentina por la presunta colusión entre la dictadura y los diarios en perjuicio de los anteriores dueños de las acciones de la papelera (BORRELLI, 2011).

[11] La inflación durante el periodo 1976-1981 se mantuvo en porcentajes muy altos: 444% en 1976; 176% en 1977; 175,5% en 1978; 159,5% en 1979; 100,8% en 1980; y 104,6 en 1981 (RAPOPORT, 2007: 651. Fuentes: CEPAL e INDEC).

[12] En 1976 la deuda significó un 18,9% en relación al PBI; en 1977 un 19,3%; en 1978 un 23,9%; en 1979 un 30,2%; en 1980 un 37,3%; en 1981 un 48%; en 1982 un 60,5% y en 1983 un 59,9% (RAPOPORT, 2007b: 669).

[13] Que enfatiza en la protesta y la condena, intenta capturar adeptos y concretar finalidades sectarias (CASTELLI, 1991: 193 y ss; según las definiciones de Raúl RIVADENEIRA PRADA).

[14] Este estilo exhorta al cumplimiento de reglas, advierte peligros, llama a la concordia.

[15] Martínez de Hoz había asegurado el 2 de abril de 1976 que el problema inflacionario había sido abordado por “correcciones artificiales (...), como el control de precios, el control de cambios, los controles de importación y subsidios a la exportación” que actuaban sobre las “consecuencias y no sobre las causas del fenómeno” generando mayores problemas a la economía (cit. por PALACIO DEHEZA, 1981: 350).

[16] Miembros del equipo económico y sectores civiles afines que eran partidarios del ajuste ortodoxo con recesión.

[17] La popularmente denominada como “tablita” era un cronograma oficial que informaba sobre el porcentaje de la devaluación del peso en los meses posteriores, mecanismo que permitió el crecimiento de la especulación en el sistema financiero.

[18] Que alaba y exagera las bondades de determinadas políticas (CASTELLI, 1991: 193 y ss; según las definiciones de Raúl RIVADENEIRA PRADA).

[19] Que diagnostica resultados de orden social y político (CASTELLI, 1991: 193 y ss; según las definiciones de Raúl RIVADENEIRA PRADA).

[20] Durante 1980 el gobierno militar mantuvo una serie de reuniones con referentes políticos y otros dirigentes civiles publicitadas como el inicio del diálogo cívico-militar, pero que no generó medidas concretas y fue interpretado más como un acto dilatorio de la dictadura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACUÑA, M. L. (1984). **De Frondizi a Alfonsín: la tradición política del radicalismo/1**. Buenos Aires.: CEAL.

BORRAT, H. (1989). **El periódico, actor político**. Barcelona: Gili

BORRELLI, M. (2008). “El diario Clarín y el “Proyecto Nacional” de Díaz Bessone (1976-1977): ¿la anhelada refundación nacional?”. *IVº Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*. Rosario: Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 14, 15 y 16 de mayo de 2008.

----- (2010a). **El diario Clarín frente a la política económica de Martínez de Hoz (1976-1981)**. Tesis de Doctorado, Facultad Ciencias. Sociales, Universidad de Buenos Aires, mimeo.

----- (2010b). “Escribiendo el epitafio: el diario Clarín en la antesala del golpe de Estado de 1976”. *Hologramática*, año VII, n° 13, vol. 2, Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires: Fac. de Ciencias Sociales, Univ. Nacional de Lomas de Zamora, septiembre-noviembre, pp. 3-23.

----- (2011). “Una ‘batalla ganada’: Clarín y la compra de Papel Prensa (1976-1978)”, en J. SABORIDO y M. BORRELLI (coordinadores), *Voces y silencios. La prensa argentina y la dictadura militar (1976-1983)*. Buenos Aires: Eudeba.

CASTELLI, E. (1991). **Manual de periodismo**. Buenos Aires: Plus Ultra.

CANITROT, A. (1980). **La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976**. Buenos Aires: Cedes.

----- (1980b). **Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981**. Buenos Aires: Cedes, vol. 3, Nº 10.

----- (1983). **Orden social y monetarismo**. Buenos Aires: Cedes.

CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (1997). **Nunca Más**. Buenos Aires: EUDEBA [Primera Edición, 1984].

DE RÚSSOVICH, R. M. y LACROIX, M. L. (1986). “**Los grandes diarios**”, en P. MENDELEVICH; R. M. DE RÚSSOVICH; M. L. LACROIX y J. RIVERA, *Crónicas del periodismo*. Bs. As: Cuadernos de historia popular argentina.

FERRERES, O. (director) (2005). **Dos siglos de economía argentina (1810-2004)**. Buenos Aires: Fundación Norte y Sur y El Ateneo.

GETINO, O. (1995). **Las industrias culturales en la Argentina**. Buenos Aires: Colihue.

KORNBLIT, A. (coordinadora) (2004). **Metodologías cualitativas en ciencias sociales**. Buenos Aires: Biblos.

MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) (1981). **La crisis argentina (periodo 1976-1981). Planteos y proposiciones del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) frente al postergado desafío de la reconstrucción nacional**. Buenos Aires: S/E.

NOSIGLIA, J. (1983). **El desarrollismo**. Buenos Aires: CEAL.

NOVARO M. y PALERMO, V., (2003). **La Dictadura Militar 1976/1983**. Buenos Aires: Paidós.

PALACIO DEHEZA, C. (1981). **El plan Martínez de Hoz y la economía argentina**. Buenos Aires: Corregidor.

PÊCHEUX, M. (1978). **Hacia el análisis automático del discurso**. Madrid: Gredos.

RAPOPORT, M. (2007). **Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)**. Buenos Aires: Emecé.

SCHVARZER, J. (1986). **La política económica de Martínez de Hoz**. Buenos Aires: Hyspamérica.

VAN DIJK, T. (1990). **La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información**. Buenos Aires, Paidós.

VERÓN, E. (1987). **La semiosis social: fragmentos para una teoría de la discursividad**. Buenos Aires: Gedisa.

VOLOSHINOV V. (1976). **El signo ideológico y la filosofía del lenguaje**. Buenos Aires: Nueva Vision,

* **Marcelo Borrelli** es Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Comunicación y Cultura (UBA) y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Es Investigador asistente del CONICET y profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Contacto: marcebor@gmail.com.